**CONFIDENCIAL**

**Fecha y hora: 28 Agosto 1984, 16:50**

**De: Embajada U.S. Lima**

**Para: Secretario de Estado, Washington D.C.; Embajadas U.S. Bogotá, Caracas, La Paz, Panamá, Quito; Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), Washington D.C.; Comandante en Jefe del Comando Sur, Quarry Heights, Panamá**

**Asunto: Gobierno peruano prohíbe “Marcha por la Paz y la Justicia” y militariza Lima[[1]](#footnote-2)**

1. Resumen: Como reacción ante dos importantes “desapariciones” e informes de asesinatos atribuidos tanto a los terroristas como a las fuerzas de seguridad, la Izquierda Unida (IU) organizó una “Marcha por la Paz y la Justicia” a ser llevada a cabo en el centro de Lima el 24 de agosto. El gobierno peruano inicialmente autorizó que tuviera lugar la marcha. Sin embargo, revirtió su decisión el 23 de agosto, y al día siguiente puso la responsabilidad de mantener el orden público en Lima en manos de las Fuerzas Armadas. Aunque IU canceló la marcha para evitar enfrentamientos con los militares, algunos militantes tomaron las calles de todas maneras. Virtualmente todos ellos fueron arrestados y luego liberados.
2. La desaparición del periodista Jaime Ayala y la desaparición/asesinato de Jesús Oropeza (REFTEL [ver telegrama de referencia]) levantaron olas de indignación que atravesaron las normales divisiones partidarias en la sociedad peruana. Las noticias de masacres de amplia escala aumentaron la sensación pública de una sociedad en la que la violencia se ha salido de control. Dado este marco, la extrema izquierda marxista peruana se posicionó a sí misma para beneficiarse políticamente de la causa de los derechos humanos. Con el alcalde de Lima Alfonso Barrantes (IU) como líder, la IU convocó para el 24 de agosto a una marcha a través de las calles del centro de Lima, para manifestarse por “la Paz y la Justicia”. Organizaciones sindicales e intelectuales, dominadas por la izquierda, así como los gobiernos locales en manos de la izquierda, apoyaron a Barrantes. Muchos otros pequeños grupos políticos también se unieron. La convocatoria de la marcha, anti-senderista y pro-derechos humanos, atrajo inicialmente a individuos del APRA, del conservador Partido Popular Cristiano (PPC) en incluso a políticos de la gobernante Acción Popular (AP).
3. A inicios del 23 de marzo, parecía que la marcha saldría adelante. Sin embargo, más tarde el prefecto de Lima, Arturo Arrate, publicó un comunicado revocando la autorización previamente dada. En una reunión de gabinete en la mañana del día siguiente, el gobierno peruano decidió tomar la medida de poner la responsabilidad de mantener el orden público en la capital en manos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, un Decreto Supremo del Gabinete limitó la participación de los militares al día propuesto para la marcha. La posición del gobierno estuvo basada constitucionalmente en el existente estado de emergencia nacional. El gobierno peruano afirmó tener informes de inteligencia que sugerían que la marcha por “Paz y Justicia”, junto con otras dos manifestaciones que los militantes de IU habían planificado el mismo día en Lima, podía llevar a la violencia callejera. Por ello, el gobierno peruano estaba obviamente preocupado sobre el impacto sobre la imagen internacional el país.
4. Los organizadores de IU respondieron cancelando la marcha y emitiendo una declaración que denunciaba el intento del gobierno de enfrentar a los posibles manifestantes contra las Fuerzas Armadas. Sin embargo, a medida que la hora programada para la marcha se acercaba, se reunieron grupos en el sitio de concentración e intentaron recorrer la ruta del desfile tal como estaba prevista. Varias prominentes personalidades de IU (incluyendo por lo menos un senador y un diputado) lideraron a los manifestantes. La policía, que los aguardaba, disolvió dichos grupos antes que pudieran continuar su camino. El número reportado de arrestos fue 236. De ellos, 235 fueron liberados en las siguientes 48 horas.
5. Comentario: Aunque el público peruano está claramente preocupado por la extensión de la violencia y las señales de violaciones a los derechos humanos por las fuerzas de seguridad, la cancelación de la marcha del 24 de agosto no ha devenido en una protesta enérgica más allá de IU. Otros partidos evaluaron la marcha como una táctica política marxista, y probablemente se sintieron aliviados por su cancelación. Sabemos que Barrantes en persona solicitó al líder del APRA, Alan García, apoyar la marcha y participar en ella, pero éste declinó. JORDAN.
1. Traducción de Ricardo Alvarado Portalino. Las notas entre corchetes pertenecen al traductor. [↑](#footnote-ref-2)